

1.3. DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN ARAGÓN (pp. 2-8)

—

1.3. DRET I POLÍTIQUES AMBIENTALS A ARAGÓ (pp. 9-15)

CÉSAR CIERCO SEIRA

Profesor titular de Derecho Administrativo / Professor titular de Dret Administratiu

Universitat de Lleida

ANTONIO EZQUERRA HUERVA

Profesor titular de Derecho Administrativo / Professor titular de Dret Administratiu

Universitat de Lleida

Sumario: 1. Las nuevas leyes de urbanismo y de ordenación del territorio. 1.1. La Ley 3/2009, de 17 de junio, Urbanística de Aragón. 1.2. La Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón. 2. El proyecto de Ley de Protección contra la Contaminación Acústica. 3. Algunas novedades en el plano reglamentario.

I. Las nuevas leyes de urbanismo y de ordenación del territorio

Durante el mes de junio, vieron la luz dos importantes leyes cuya conexión con lo medio ambiental es clara: por un lado, la Ley 3/2009, de 17 de junio, Urbanística de Aragón; y, por otro, la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón.

1.1. La Ley 3/2009, de 17 de junio, Urbanística de Aragón

Ni que decir tiene que la aprobación de una Ley de urbanismo tiene un fuerte impacto en el escenario ambiental. Y no sólo pensando desde una concepción generosa del medio ambiente en el que tenga cabida el medio urbano, sino, simple y llanamente, porque las conexiones entre el urbanismo y el medio ambiente son, como es sabido, muchas y de entidad.

La Ley 3/2009, de 17 de junio, Urbanística de Aragón, representa un importante esfuerzo por dotar a esta Comunidad de un marco legislativo cabal y estable, superando así el período de inestabilidad e inseguridad habido en esta materia y que trató de paliar la precedente Ley Urbanística de Aragón de 1999 (Ley 5/1999, de 25 de marzo). Siendo esto así, no es de extrañar que, acorde con la concepción moderna del urbanismo, el componente ambiental no sea solamente un aspecto a tener en cuenta en determinados puntos —como podría ser el régimen del suelo no urbanizable—; antes bien, constituye ya una nota inherente a la significación misma de esta función pública que está puesta sin ambages al servicio del objetivo mayor y final del desarrollo sostenible. Basta así con dar una ojeada a los principios que han de informar la actividad urbanística (art. 8) y a los objetivos hacia los que éste debe tender (art. 9) para advertir la presencia clara y en primera línea de la preocupación ambiental.

Además de este interés y compromiso ambientales que recorre el conjunto de la Ley, la cuestión ambiental aflora de manera singular en diferentes pasajes. Destacable es, por supuesto, el régimen del suelo no urbanizable, que aparece aquí dividido en dos categorías: la de suelo no urbanizable especial, donde la protección se hace más intensa

en atención justamente a los señalados valores que de suyo atesora esta clase de suelo, prohibiéndose con carácter general cualquier construcción; y la de suelo no urbanizable genérico, concebida con carácter residual y más dada a su aprovechamiento urbanístico, si bien bajo un estricto régimen de licencia y autorización (arts. 17-19; 30-33). De interés es también la incidencia de la variable ambiental en el ámbito de la planificación urbanística. Así, no es ocioso notar aquí que la figura central del planeamiento, el plan general de ordenación urbana, deberá concretar el modelo de evolución urbana ponderando siempre desarrollo y sostenibilidad ambiental (art. 39), mandato que luego enlaza con las exigencias de la legislación ambiental tanto de orden sustantivo como procedimental. Y también vale la pena señalar, en fin, las previsiones en torno a la protección del paisaje, exigiendo que la actividad urbanística integre “la consideración del paisaje en todas sus fases” y que las construcciones observen en todo caso “las exigencias de protección del medio ambiente establecidas en el ordenamiento jurídico”, sin “menoscabar la belleza o armonía del paisaje natural, rural o urbano” (art. 218).

1.2. La Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón

La Ley de Ordenación del Territorio (2009) viene a tomar el testigo de la Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del Territorio, con el objetivo de remozar por completo esta importante responsabilidad pública, calificada de exclusiva según el nuevo Estatuto de Autonomía (art. 71.8^a), gracias a la incorporación de todo el bagaje conceptual que en el transcurso de estos últimos años se ha ido generando en España en torno a la definición de la significación y del alcance de la ordenación territorial y que es fruto tanto de las contribuciones doctrinales como de la labor de delimitación llevada a cabo por los órganos jurisdiccionales y, señaladamente, por el Tribunal Constitucional. Además de sacar provecho de este estadio de maduración conceptual en torno a esta materia, el legislador aragonés se hace eco en la nueva Ley de Ordenación Territorial de toda la savia procedente de Europa, tanto del Consejo de Europa, como, sobre todo, de la Unión Europea. Hasta el punto de que se asumen como propias las estrategias europeas de desarrollo territorial, adaptándolas a la realidad aragonesa. De esta forma, las coordenadas del modelo territorial a seguir en adelante se articulan a partir de tres orientaciones fundamentales: en primer lugar, el desarrollo policéntrico y equilibrado, lo que, en el caso aragonés, exige afrontar el reto de armonizar el mundo urbano —con la aguda cuestión del espacio metropolitano de Zaragoza y la adaptación

de la influencia regional de la capital— y el lanzamiento de un mundo rural extenso y de complejo abordaje. En segundo término, se pone mucho énfasis en el acceso a las infraestructuras; acceso que ha de ser coherente con el mencionado desarrollo policéntrico, aprovechando, asimismo, la singular situación estratégica de Aragón como enlace de la península con Francia y el centro de Europa. Finalmente, se tiene en cuenta, como no podría ser de otro modo, la gestión prudente del patrimonio natural y cultural, presente en todas las políticas de ordenación territorial.

A estas tres directrices que son influencia directa de los vientos comunitarios, el legislador aragonés añade dos estrategias adicionales. Por un lado, la Ley hace un claro llamamiento a la cooperación y a la coordinación administrativas, dando forma a no pocas herramientas entre las que destaca la creación de un órgano consultivo llamado a ser referente esencial como es el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, en cuya composición se asegurará una presencia institucional “que permita la coordinación de los distintos Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma con la Administración General del Estado y otras Administraciones públicas con competencias sobre el territorio”. Además, “contará con representaciones de las organizaciones más representativas de las entidades locales, empresariales y sindicales, así como con la participación de asociaciones y otras entidades vinculadas con la ordenación del territorio, y podrá incluir la asistencia de expertos y especialistas en esta materia” (art. 9). Precisamente en la línea de fomentar la participación ciudadana, se insiste en una segunda línea estratégica vinculada a permitir que la población pueda intervenir en la confección de los distintos instrumentos de planteamiento territorial. El mandato general en tal sentido viene plasmado en el art. 16 de la Ley, al indicar que “el Gobierno de Aragón garantizará la participación ciudadana en los procesos de elaboración del planeamiento territorial, arbitrando mecanismos de participación que incluyan información y asesoramiento a la ciudadanía, y buscando la colaboración de los diversos agentes sociales e instituciones implicados”.

Todas estas directrices habrán de canalizarse a través de diferentes instrumentos que pasan por la información, la planificación y la gestión territoriales. El meollo de la política de ordenación territorial sigue situándose, no obstante, en el apartado de la planificación, donde cabe destacar dos grandes figuras: la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón y las Directrices de Ordenación Territorial.

La Estrategia Territorial de Aragón tiene como objetivos “determinar el modelo de ordenación y desarrollo territorial sostenible de toda la Comunidad Autónoma”, fijar “las estrategias para alcanzarlo” y establecer “los indicadores para el seguimiento de la evolución de la estructura territorial y su aproximación al modelo establecido” (art. 18). Se le atribuye naturaleza reglamentaria, si bien posee un singular procedimiento de gestación, en el que se incluye un examen por las Cortes de Aragón como trámite previo a la aprobación del decreto gubernamental (art. 19). Por su parte, las Directrices de Ordenación Territorial (art. 21), siempre con plena vinculación a la Estrategia Territorial de Aragón, pueden responder a diferentes motivaciones, ya sea la ordenación de una comarca o de una zona delimitada por su características homogéneas o funcionales (Directrices zonales), ya la ordenación de la incidencia territorial de determinadas actividades económicas o administrativas, o de elementos relevantes del sistema territorial (Directrices especiales).

Finalmente, es de destacar que, sin perjuicio de que la tutela ambiental figure como una de las estrategias centrales de la Ley, no faltan las previsiones tendentes a asegurar un acoplamiento armónico con los instrumentos típicamente ambientales. Es el caso de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, a los que se inviste de la condición de Directrices especiales, aunque reconociendo en todo caso su prevalencia sobre los instrumentos de ordenación territorial (art. 21.4). Y también del singular Informe Territorial sobre Planes, Programas y Proyectos, insertado como trámite dentro del procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas —regulado en la Ley 7/2006, de 22 de junio de Protección Ambiental de Aragón— y con el que se pretende crear un puente que preserve la coherencia entre las políticas ambiental y de ordenación del territorio (art. 51).

2. El Proyecto de Ley de Protección contra la Contaminación Acústica

En cuando a la iniciativa parlamentaria gubernamental, dos son los proyectos de ley que actualmente están siendo tramitados en las Cortes de Aragón.

Por un lado, cabe referirse, aun de forma breve, al proyecto de ley de modificación de la Ley 23/2003, de 22 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (BOCA núm. 194, de 7 de enero de 2010), cuyo alcance se ciñe fundamentalmente a cuestiones de orden procedimental relacionadas con la clarificación

de los expedientes que está llamado a resolver o informar el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, así como del plazo y del régimen del silencio.

Mucha más enjundia presenta el proyecto de ley de protección contra la contaminación acústica en Aragón (*BOCA* núm. 169, de 13 de octubre). El objetivo que persigue este proyecto es claro en el sentido de colmar el espacio que corresponde a las Comunidades Autónomas dentro de los márgenes establecidos por la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, exteriorizando la preocupación del legislador aragonés por el tratamiento del ruido desde la doble vertiente, sanitaria y ambiental, alineando de paso a esta comunidad con las corrientes más modernas de este pujante sector. Entre los aspectos a destacar en una primera toma de contacto con el texto, llama la atención el enfoque adoptado por el proyecto en lo que hace a la distribución competencial. Y es que la singular situación municipal aragonesa provoca que la lucha contra el ruido sea una necesidad sentida por los Ayuntamientos de una forma muy diversa según cual sea la dimensión poblacional y que, acorde con esa intensidad, sean también muy dispares los medios técnicos a su disposición para llevar a cabo una vigilancia eficaz al respecto. Es por ello que en el proyecto se articulan diversos medios para que los municipios puedan descargar sus responsabilidades en materia de ruido sobre las comarcas (arts. 8 y 9.1) e incluso que las comarcas puedan asociarse entre sí para prestar servicios con particulares exigencias técnicas o profesionales (art. 9.2).

A propósito de la tecnicidad que plantea el control del ruido, luce en el proyecto una clara opción a favor de la “externalización” de algunas funciones públicas relativas a la evaluación acústica. Encajan en esta idea las entidades de evaluación acústica, que, una vez acreditadas, podrán ejercer la tarea de evaluadores.

Fuera de estas cuestiones, el proyecto se estructura sobre la base de la división entre la calidad acústica (Título II) y la prevención y corrección de la contaminación acústica (Título III), sin olvidar un espacio para la inspección y el régimen sancionador (Título IV). En lo que se refiere a la calidad acústica, se desarrollan las figuras de las áreas acústicas, los índices acústicos, las servidumbres acústicas o los mapas de ruido. En cuanto a la previsión y corrección, destaca la regulación de los planes de acción en materia de contaminación acústica, concebidos como los planes encaminados a afrontar las cuestiones relativas a la contaminación acústica y sus efectos, incluyendo la reducción del ruido y las vibraciones.

3. Algunas novedades en el plano reglamentario

Si descendemos al piso reglamentario, son muchas las normas aprobadas en este período en el terreno ambiental. No obstante, en la línea que persigue esta crónica y que no es otra que llamar la atención del lector sobre novedades especialmente relevantes o sugestivas, cumple dar cuenta de la aprobación de las siguientes disposiciones.

En primer lugar, interesa reseñar el Decreto 102/2009, de 26 de mayo, por el que se regula la autorización de la instalación y uso de comederos para la alimentación de aves necrófagas con determinados subproductos animales no destinados al consumo humano y se amplía la Red de comederos de Aragón. Se incide así en una cuestión de relevancia inconcusa en la protección de las aves y cuyos márgenes sustantivos aparecen trazados tanto por la normativa comunitaria como por la normativa estatal (RD 664/2007, de 25 de mayo); normativas con las que ha conectarse este Decreto aragonés encargado de concretar el procedimiento de autorización para la instalación y uso de comederos para la alimentaciones de aves rapaces necrófagas y dar respuesta a cuestiones conexas como las relativas a la recogida y el transporte de los cadáveres de animales no destinados al consumo humano.

En segundo término, cabe hacer mención del Decreto 181/2009, de 20 de octubre, regulador de los núcleos zoológicos. Se trata de un reglamento que viene a desarrollar las previsiones de orden general que sobre la materia se contienen en la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón. Su objeto se centra en los denominados núcleos zoológicos que afectan a un gran número de instalaciones: desde los circos a las tiendas de venta de animales, pasando por las clínicas y centros veterinarios, entre un largo elenco. Y su cometido no es otro que estatuir un régimen de control, desde la óptica que impulsa el respeto y la defensa de los animales, sobre tales núcleos que se apoya fundamentalmente en los mecanismos clásicos de la autorización y del registro; mecanismos que en la mayor parte de los casos habrán de convivir con los sistemas de control ambiental previstos en la Ley de Protección Ambiental de Aragón (Ley 7/2006, de 22 de junio).

En tercer lugar, es de interés noticiar la creación del Registro Voluntario de Entidades Adheridas a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (Decreto 200/2009, de 17 de noviembre). Con esta medida se pretende dar un paso importante en el impulso de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático gracias al avance en la responsabilidad social y el compromiso activo de los ciudadanos. A tal objeto, se ha

articulado un registro administrativo con un perfil singular. Y es que dicho registro no pretende ser, como es característico en la actividad de limitación, la base para facilitar la labor de control por parte de la Administración, sino que su misión encaja más bien en las técnicas de fomento. Así, se abre libremente a cualquier entidad que quiera comprometerse, más allá, claro está, de las exigencias legales, con los fines que persigue la mencionada estrategia. Asumido el compromiso —que admite diversos niveles— y efectuado el registro, la entidad quedará legitimada para hacer valer su condición y, en particular, podrá utilizar una serie de marcas identificativas a fin de hacer visible su esfuerzo en este terreno.

Finalmente, en relación con los espacios naturales protegidos (Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón), es oportuno dar cuenta del otorgamiento al nacimiento del río Pitarque —ubicado en la comarca de Maestrazgo (Teruel)— de la condición de Monumento Natural en virtud del Decreto 217/2009, de 15 de diciembre; condición aplicable a aquellos espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza. En este mismo orden de cosas, el Gobierno de Aragón, mediante el Decreto 71/2010, de 13 de abril, ha investido a las Fozes de Fago y Biniés de la condición de Paisaje Protegido, habida cuenta de los extraordinarios valores naturales, estéticos y culturales que atesora este lugar situado en la comarca de la Jacetania (Huesca). Dos nuevas piezas, pues, para la Red Natural de Aragón.

Sumari: 1. Les noves lleis d'urbanisme i d'ordenació del territori. 1.1. La Llei 3/2009, de 17 de juny, urbanística d'Aragó. 1.2. La Llei 4/2009, de 22 de juny, d'ordenació del territori d'Aragó. 2. El projecte de llei de protecció contra la contaminació acústica. 3. Algunes novetats en l'àmbit reglamentari.

I. Les noves lleis d'urbanisme i d'ordenació del territori

Durant el mes de juny, dues lleis importants amb clara connexió amb el medi ambient van veure la llum: d'una banda, la Llei 3/2009, de 17 de juny, urbanística d'Aragó. I de l'altra, la Llei 4/2009, de 22 de juny, d'ordenació del territori d'Aragó.

1.1. La Llei 3/2009, de 17 de juny, urbanística d'Aragó

No cal dir que l'aprovació d'una llei d'urbanisme té un fort impacte en l'escenari ambiental. I no només pensant en una concepció generosa del medi ambient en què tingui cabuda el medi urbà, sinó, simplement i planerament, perquè les connexions entre urbanisme i medi ambient, no cal dir-ho, són moltes i són importants.

La Llei 3/2009, de 17 de juny, urbanística d'Aragó representa un esforç important per dotar aquesta comunitat d'un marc legislatiu com cal i estable, de manera que així se supera el període d'inestabilitat i d'inseguretat que hi ha hagut en aquesta matèria i que la precedent llei urbanística d'Aragó de 1999 (Llei 5/1999, de 25 de març) va tractar de pal·liar. Com que això és així, no és estrany que, d'acord amb la concepció moderna de l'urbanisme, el component ambiental no sigui només un aspecte que s'ha de tenir en compte en determinats punts —com podria ser el règim del sòl no urbanitzable—, sinó que constitueix una nota inherent a la significació mateixa d'aquesta funció pública que s'ha posat sense embuts al servei de l'objectiu més gran i final del desenvolupament sostenible. Així n'hi ha prou amb fer un cop d'ull als principis que han d'informar l'activitat urbanística (art. 8) i als objectius cap als quals aquest ha de tendir (art. 9) per advertir la presència clara i en primera línia de la preocupació ambiental.

A més d'aquest interès i compromís ambientals que recorren el conjunt de la llei, la qüestió ambiental aflora de manera singular en diferents passatges. Per descomptat, cal destacar el règim del sòl no urbanitzable, que aquí es divideix en dues categories: la de sòl no urbanitzable especial, en què la protecció es fa més intensa atenent justament els valors assenyalats que aquesta mena de sòl atresora en si mateix, i en què es prohibeix amb caràcter general qualsevol construcció; i la de sòl no urbanitzable genèric,

concebuda amb caràcter residual i més donada a l'aprofitament urbanístic, si bé sota el règim estricte de llicència i autorització (art. 17-19; 30-33). És interessant, també, la incidència de la variable ambiental en l'àmbit de la planificació urbanística. Així, no és ocios assenyalar aquí que la figura central del planejament, el Pla General d'Ordenació Urbana, ha de concretar el model d'evolució urbana, en què el desenvolupament i la sostenibilitat ambientals han de ponderar sempre (art. 39), mandat que després enllaça amb les exigències de la legislació ambiental tant d'ordre substantiu com procedimental. I també, en definitiva, val la pena assenyalar les previsions al voltant de la protecció del paisatge que exigeixen que l'activitat urbanística integri “la consideració del paisatge en totes les seves fases” i que les construccions observin, en tot cas, “les exigències de protecció del medi ambient establertes en l'ordenament jurídic”, sense “menyscabar la bellesa o l'harmonia del paisatge natural, rural o urbà” (art. 218).

1.2. La Llei 4/2009, de 22 de juny, d'ordenació del territori d'Aragó

La llei d'ordenació del territori (2009) agafa el testimoni de la Llei 11/1992, de 24 de novembre, d'ordenació del territori, amb l'objectiu de restaurar completament aquesta important responsabilitat pública, qualificada d'exclusiva segons el nou Estatut d'autonomia (art. 71.8a), gràcies a la incorporació de tot el bagatge conceptual que en el transcurs d'aquests últims anys s'ha anat generant a Espanya al voltant de la definició de la significació i de l'abast de l'ordenació territorial, i que és fruit tant de les contribucions doctrinals com de la feina de delimitació que han dut a terme els òrgans jurisdiccionals i, especialment, el Tribunal Constitucional. A més de treure profit d'aquest estadi de maduració conceptual al voltant d'aquesta matèria, en la nova llei d'ordenació territorial el legislador aragonès es fa ressò de tota la saba procedent d'Europa, tant del Consell d'Europa, com, sobretot, de la Unió Europea. Fins al punt que les estratègies europees de desenvolupament territorial s'assumeixen com a pròpies i s'adapten a la realitat aragonesa. D'aquesta manera, les coordenades del model territorial que cal seguir d'ara endavant s'articulen a partir de tres orientacions fonamentals: en primer lloc, el desenvolupament policèntric i equilibrat, cosa que, en el cas aragonès, exigeix afrontar el repte d'harmonitzar el món urbà —amb la qüestió aguda de l'espai metropolità de Saragossa i l'adaptació de la influència regional de la capital— i el llançament d'un món rural extens i complex d'abordar. En segon terme, es posa molt èmfasi a l'accés a les infraestructures, accés que ha de ser coherent amb el

desenvolupament policèntric esmentat, aprofitant, així mateix, la situació estratègica singular d'Aragó com a enllaç de la Península amb França i amb el centre d'Europa. Finalment, es té en compte, com no podria ser de cap altra manera, la gestió prudent del patrimoni natural i cultural, present en totes les polítiques d'ordenació territorial.

A aquestes tres directrius, que són influència directa dels vents comunitaris, el legislador aragonès hi afegeix dues estratègies addicionals. D'una banda, la llei fa una crida evident a la cooperació i a la coordinació administratives, i dóna forma a no poques eines, entre les quals destaca la creació d'un òrgan consultiu que ha de ser un referent essencial, com és el Consell d'Ordenació del Territori d'Aragó, en la composició del qual s'ha d'assegurar una presència institucional “que permeti coordinar els diferents departaments de l'Administració de la comunitat autònoma amb l'Administració General de l'Estat i altres administracions públiques amb competències sobre el territori”. A més a més, “ha de tenir representació de les organitzacions més representatives de les entitats locals, empresarials i sindicals, i participació d'associacions i altres entitats vinculades a l'ordenació del territori, i ha de poder incloure experts i especialistes en aquesta matèria” (art. 9). Precisament en la línia de fomentar la participació ciutadana, s'insisteix en una segona línia estratègica vinculada a permetre que la població pugui intervenir en la confecció dels diferents instruments de plantejament territorial. El mandat general en aquest sentit ho plasma en l'art. 16 de la llei, en indicar que “El Govern d'Aragó ha de garantir la participació ciutadana en els processos d'elaboració del planejament territorial, arbitrants mecanismes de participació que incloguin informació i assessorament a la ciutadania, i cercant la col·laboració dels diversos agents socials i institucions implicats”.

Totes aquestes directrius han de canalitzar-se a través de diferents instruments que exigeixen informació, planificació i gestió territorials. No obstant això, el moll de la política d'ordenació territorial continua situant-se en l'apartat de planificació, en què cal destacar dos grans figures: l'Estratègia d'Ordenació Territorial d'Aragó i les Directrius d'Ordenació Territorial.

L'Estratègia Territorial d'Aragó té com a objectius “determinar el model d'ordenació i desenvolupament territorial sostenible de tota la comunitat autònoma”, fixar “les estratègies per aconseguir-ho” i establir “els indicadors per seguir l'evolució de l'estructura territorial i l'aproximació al model establert” (art. 18). S'hi atribueix natura reglamentària, si bé posseeix un procediment singular de gestació en què s'inclou

l'examen per part de les Corts d'Aragó com a tràmit previ a l'aprovació del decret governamental (art. 19). Per la seva banda, les Directrius d'Ordenació Territorial (art. 21), sempre amb vinculació plena a l'Estratègia Territorial d'Aragó, poden respondre a diferents motivacions, sia a l'ordenació d'una comarca o d'una zona delimitada per les seves característiques homogènies o funcionals (directrius zonals), sia a l'ordenació de la incidència territorial de determinades activitats econòmiques o administratives, o d'elements rellevants del sistema territorial (directrius especials).

Finalment, cal destacar que, sense perjudici que la tutela ambiental figuri com una de les estratègies centrals de la llei, no hi falten les previsions tendents a assegurar l'adaptació harmònica amb els instruments típicament ambientals. És el cas dels plans d'ordenació dels recursos naturals, als quals s'atorga la condició de directrius especials, encara que, en tot cas, reconeixent-ne, la prevalença sobre els instruments d'ordenació territorial (art. 21.4). I també de l'Informe territorial sobre plans, programes i projectes, inserit com a tràmit en el procediment d'avaluació ambiental de plans i programes —regulat per la Llei 7/2006, de 22 de juny, de protecció ambiental d'Aragó—, i amb el qual es pretén crear un pont que preservi la coherència entre les polítiques ambientals i d'ordenació del territori (art. 51).

2. El projecte de llei de protecció contra la contaminació acústica

Quant a la iniciativa parlamentària governamental, els projectes de llei que actualment es tramiten a les Corts d'Aragó són dos.

D'una banda, cal referir-se, fins i tot de forma breu, al projecte de llei de modificació de la Llei 23/2003, de 22 de desembre, de creació de l'Institut Aragonès de Gestió Ambiental (BOCA núm. 194, de 7 de gener de 2010), l'abast del qual se cenyeix fonamentalment a qüestions d'ordre procedimental relacionades amb l'aclariment dels expedients que l'Institut Aragonès de Gestió Ambiental està cridat a resoldre o informar, així com del termini i del règim del silenci.

El projecte de llei de protecció contra la contaminació acústica a Aragó (BOCA núm. 169, de 13 d'octubre) presenta més substància. L'objectiu que persegueix aquest projecte és clar en el sentit d'omplir l'espai que correspon a les comunitats autònomes en els marges establerts per la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, i exterioritza la preocupació del legislador aragonès pel tractament del soroll des de la doble vessant,

sanitària i ambiental, i, de passada, alinia aquesta comunitat amb els corrents més moderns d'aquest sector puixant. Entre els aspectes que cal destacar en la primera presa de contacte amb el text, crida l'atenció l'enfocament del projecte pel que fa a la distribució competencial. I és que la situació municipal aragonesa singular provoca que la lluita contra el soroll sigui una necessitat sentida de forma molt diversa pels ajuntaments segons quina sigui la dimensió poblacional i que, d'acord amb aquesta intensitat, els mitjans tècnics a la seva disposició per dur a terme una vigilància eficaç respecte d'això són molt dispars. És per això que al projecte s'articulen diversos mitjans perquè els municipis puguin descarregar les responsabilitats en matèria de soroll sobre les comarques (art. 8 i 9.1) i, fins i tot, que les comarques puguin associar-se entre si per prestar serveis amb particulars exigències tècniques o professionals (art. 9.2).

A propòsit de la tecnicitat que planteja el control del soroll, en el projecte hi ha una clara opció a favor de l'"externalització" d'algunes funcions públiques relatives a l'avaluació acústica. Les entitats d'avaluació acústica encaixen en aquesta idea, les quals, un cop acreditades, podran exercir la tasca d'avaluadores.

Fora d'aquestes qüestions, el projecte s'estructura sobre la base de la divisió entre la qualitat acústica (títol II) i la prevenció i correcció de la contaminació acústica (títol III), sense oblidar l'espai per a la inspecció i el règim sancionador (títol IV). Pel que fa a la qualitat acústica, es desenvolupen les figures de les àrees acústiques, els índexs acústics, les servituds acústiques o els mapes de soroll. Quant a la previsió i correcció, destaca la regulació dels plans d'acció en matèria de contaminació acústica, concebuts com a plans encaminats a afrontar les qüestions relatives a la contaminació acústica i els seus efectes, incloent-hi la reducció del soroll i les vibracions.

3. Algunes novetats en l'àmbit reglamentari

Si descendim al pis reglamentari, les normes que s'han aprovat en aquest període en l'àmbit ambiental són moltes. No obstant això, en la línia que persegueix aquesta crònica i que no és cap altra que cridar l'atenció del lector sobre novetats especialment rellevants o suggestives, toca donar compte de l'aprovació de les disposicions següents.

En primer lloc, cal fer referència al Decret 102/2009, de 26 de maig, pel qual es regula l'autorització de la instal·lació i l'ús de menjadors per a l'alimentació d'aus necròfages amb determinats subproductes animals no destinats al consum humà i s'amplia la Xarxa

de Menjadors d'Aragó. S'incideix, així, en una qüestió de rellevància inconcussa en la protecció de les aus i dels marges substantius dels quals apareixen traçats tant per la normativa comunitària com per la normativa estatal (RD 664/2007, de 25 de maig); normatives amb què ha connectar-se aquest decret aragonès encarregat de concretar el procediment d'autorització per a la instal·lació i l'ús de menjadors per a alimentacions d'aus rapaces necròfagues i donar resposta a qüestions connexes com les relatives a la recollida i el transport dels cadàvers d'animals no destinats al consum humà.

En segon terme, cal fer referència al Decret 181/2009, de 20 d'octubre, regulador dels nuclis zoològics. Es tracta d'un reglament que desplega les previsions d'ordre general que conté la Llei 11/2003, de 19 de març, de protecció animal a la comunitat autònoma d'Aragó sobre la matèria. El seu objecte se centra en els nuclis zoològics que afecten un gran nombre d'instal·lacions: des dels circs fins a les botigues de venda d'animals, passant per les clíniques i els centres veterinaris, entre un llarg estol. I la seva comesa no és cap altra que establir un règim de control, des de l'òptica que impulsa el respecte i la defensa dels animals, sobre aquests nuclis, que es fonamenta en els mecanismes clàssics de l'autorització i del registre, mecanismes que en la major part dels casos hauran de conuiu amb els sistemes de control ambiental previstos per la llei de protecció ambiental d'Aragó (Llei 7/2006, de 22 de juny).

En tercer lloc, és interessant comunicar la creació del Registre Voluntari d'Entitats Adherides a l'Estratègia Aragonesa de Canvi Climàtic i Energies Netes (Decret 200/2009, de 17 de novembre). Amb aquesta mesura es pretén fer un pas important en l'impuls de l'Estratègia Aragonesa de Canvi Climàtic gràcies a l'avanç en la responsabilitat social i el compromís actiu dels ciutadans. Per això, s'ha articulat un registre administratiu amb un perfil singular. I és que aquest registre no pretén ser la base per facilitar la feina de control de l'Administració, com és característic de l'activitat de limitació, sinó que la seva missió encaixa més aviat amb les tècniques de foment. Així, s'obre lliurement a qualsevol entitat que vulgui comprometre's, més enllà, evidentment, de les exigències legals, amb els fins que persegueix l'estratègia esmentada. Assumit el compromís, que admet diversos nivells, i efectuat el registre, l'entitat queda legitimada per fer valer la seva condició i, en particular, pot utilitzar una sèrie de marques identificatives a fi de fer visible el seu esforç en aquest terreny.

Finalment, amb relació als espais naturals protegits (Llei 6/1998, de 19 de maig, d'espais naturals protegits d'Aragó), és oportú donar compte de l'atorgament de la

condició de Monument Natural al naixement del riu Pitarque —ubicat a la comarca del Maestrat (Terol)— en virtut del Decret 217/2009, de 15 de desembre, condició aplicable als espais o elements de la natura constituïts bàsicament per formacions de notòria singularitat, raresa o bellesa. En aquest mateix ordre de coses, el Govern d'Aragó, mitjançant el Decret 71/2010, de 13 d'abril, ha atorgat a les *fozes* de Fago i Biniés la condició de Paisatge Protegit, tenint en compte els extraordinaris valors naturals, estètics i culturals que atresora aquest lloc situat a la comarca de la Jacetania (Osca). Dues noves peces, per tant, per a la Xarxa Natural d'Aragó.